



Bogotá, D.C., siete (07) de marzo de dos mil veintidós (2022)

REFERENCIA

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2022-00067-00
ACCIONANTE: LUIS ERNESTO OLAVE VALENCIA y OSIRIS MENA MORENO
ACCIONADAS: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL y PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS
CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

Previo a decidir sobre la admisión o inadmisión de la presente acción constitucional, se procederá a obedecer y cumplir con lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, Magistrado Ponente José María Armenta Fuentes, quien a través de providencia de fecha 04 de marzo de 2022 resolvió devolver el expediente de la tutela de la referencia con sus anexos a este Juzgado, por las razones expuestas en dicho proveído.

1. Así las cosas, de conformidad con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991, concordante con el artículo 1º, inciso 1º del Decreto 1382 de 2000, y el Decreto 1983 del 30 de noviembre de 2017, se **ADMITE** la ACCIÓN DE TUTELA instaurada por **LUIS ERNESTO OLAVE VALENCIA** identificado con cédula de ciudadanía No. 79.672.384 y **OSIRIS MENA MORENO** identificada con cédula de ciudadanía No. 1.077.423.681, quienes actúan a través de apoderado; en contra del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL** y de la **PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, en procura de la protección de los derechos fundamentales que denominaron igualdad, elegir y ser elegido, y amparo de negritudes como grupos de especial protección.

2. La presente acción constitucional se encuentra encaminada a que se ordene a la Previsora S.A. Compañía de Seguros a que proceda a expedir de forma inmediata, la póliza que la parte actora le solicitó a través de petición de 23 de febrero del año en curso, con el propósito de cobrar el giro del anticipo que le fuera otorgado al Consejo Comunitario de Guayabal – Cámara Especial Afrodescendientes, previsto en la Resolución No. 1323 del 15 de febrero de 2022 proferida por el Consejo Nacional Electoral y regulado por la Ley 1475 de 2011, para así poder participar en condiciones de igualdad en el campaña electoral que les ocupa, y que de acuerdo con lo establecido en la Resolución No. 8439 de 2021, la entidad encargada de ejecutar el mentado *giro de anticipo* es la Registraduría Nacional del Estado Civil; se procederá a vincular a esta última entidad al trámite en curso, con el propósito de permitirle ejercer su derecho de contradicción y defensa.

3. En el mismo escrito de tutela, se formuló una solicitud de medida provisional, encaminada a que la compañía aseguradora expida la póliza a que se hace mención en el numeral anterior.



4. La Sala Plena de la Corte Constitucional en el Auto 312 de 2018 sintetizó tres exigencias básicas para que la adopción de medidas provisionales bien sea de oficio o a solicitud de parte, resulte procedente. Dichos presupuestos son los siguientes:

- (i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (*fumus boni iuris*).
- (ii) Que exista un riesgo probable de que la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (*periculum in mora*).
- (iii) Que la medida provisional no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.

5. En cuanto al primer presupuesto, la Corte Constitucional en el Auto 251 de 2020, lo definió “*como un principio de veracidad en cuanto a la afectación del derecho o a la protección del interés público invocado como fundamento de la pretensión principal de la demanda de amparo*”. Aunque la misma Corte reconoció que en la fase inicial del proceso no es posible arribar a un nivel total de certeza sobre la violación de los derechos fundamentales en controversia, sí es necesario un estándar de veracidad apenas mínimo. Por tal razón, la solicitud de medida provisional “*debe estar soportada en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y en apreciaciones jurídicas razonables, sustentadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional*”.

6. Por su parte, en el análisis del segundo requisito (*periculum in mora*) es necesario sopesar el riesgo de que, al no adoptarse la medida cautelar, ocasione un perjuicio o daño mayor del que se expone en la demanda que, de no precaverse, transforme en tardío el fallo definitivo. En palabras de la Corte, este requisito puede identificarse como “*un temor fundado de que el derecho se frustre o sufra menoscabo durante la sustanciación del proceso*”.¹

7. En la providencia en comento, la Corte precisó que el análisis de los dos presupuestos o requisitos debe ser conjunto. Precisamente, el segundo requisito (*periculum in mora*) impide que el juez de tutela profiera una orden ante la simple apariencia de verdad (*fumus bonis iuris*) de la solicitud cautelar. Ello quiere decir que si no existe riesgo de que se ocasione un daño mayor al señalado en la demanda de tutela la medida debe ser denegada, aun cuando exista apariencia de buen derecho. En palabras de la Corte, “*la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el asunto de fondo, así se cuente con todos los elementos para tomar una decisión. El Artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 solo se activa cuando, además de la apariencia de verdad, se requiera la intervención urgente del juez. A su vez, esto supone la amenaza de un perjuicio irremediable a un derecho fundamental o al interés público, que no podría ser corregido en la sentencia final.*”

¹ *Ibidem*.



8. Por último, el tercer requisito incorpora el concepto de la proporcionalidad al análisis. La Corte indicó que *“si bien en esta fase inicial no es dable desarrollar plenamente el juicio de proporcionalidad, sí es necesario ponderar entre los derechos que podrían verse afectados con la medida. La ponderación que esta etapa demanda funge como una última salvaguarda en favor del ciudadano. Evita que se tomen medidas que, aunque podrían estar justificadas legalmente, ocasionarían un perjuicio grave e irreparable. La proporcionalidad no supone un estándar universal y a priori de corrección, sino que exige una valoración que atienda las particularidades de cada caso concreto”*.

9. Una vez leído el escrito de tutela de la referencia y analizado el material probatorio aportado al expediente, el Juzgado no reúne las condiciones necesarias para acceder a la medida cautelar solicitada, por los siguientes argumentos:

10. En cuanto a la apariencia de buen derecho, dentro del plenario no obra el suficiente material probatorio que permita sostener que la Previsora S.A. Compañía de Seguros vulneró algún derecho fundamental de los actores, por cuanto no se tiene certeza de manera prístina si dicha compañía, en efecto, dentro de su portafolio de productos y servicios expide dichas pólizas a que se alude en el escrito de tutela. Tampoco es diáfano, al menos en esta etapa procesal, que a otros partidos o movimientos políticos efectivamente la misma compañía aseguradora expidiera la aludida póliza. El Despacho reconoce que los actores remitieron, con su escrito de tutela, un pantallazo de la red social twitter que aparentemente da cuenta de ese hecho, sin embargo, dicho elemento de convicción es insuficiente para acreditar una posible violación al derecho fundamental a la igualdad, al menos, se repite, en este escenario procesal.

En ese sentido, el Juzgado considera que es inane el análisis del segundo presupuesto pues si la apariencia del buen derecho no logra determinarse en esta instancia procesal, tampoco es urgente la intervención del juez de tutela.

Por consiguiente, se hace necesario requerir la siguiente prueba documental para poder adoptar una decisión al respecto:

Se requerirá al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de un (01) día siguiente a la notificación del presente proveído, alleguen cada uno un informe con destino al expediente de la referencia, en el que certifique si existe un listado taxativo de cuáles son las entidades o compañías autorizadas para expedir la póliza o garantía bancaria de que trata el numeral primero del artículo octavo de la Resolución No. 8439 del 25 de noviembre de 2021, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

Por otra parte, se procederá a requerir a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, para que en el mismo término señalado en precedencia, informe a esta Agencia Judicial con claridad las razones por las cuales respondió de forma negativa la solicitud elevada por la parte actora vía correo electrónico del 23 de febrero de la presente anualidad, en la que solicitó la expedición de la póliza de la referencia. En



el mismo informe deberá manifestar a qué partidos o movimientos políticos relacionados en la Resolución No. 1323 del 15 de febrero de 2022, les ha expedido la citada póliza.

El Despacho hace la claridad a las partes que una vez sea allegada la prueba documental de la referencia y de considerarlo imperativo, procederá a decretar medida provisional de oficio, acorde con lo establecido en el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991.

Por último, se reconocerá personería al abogado postulante para actuar en representación de la parte accionante, dado que el poder allegado se ajusta a los lineamientos contenidos en el artículo 74 del Código General del Proceso.

Por consiguiente, se dispone:

1. **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE** lo decidido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Segunda – Subsección “A”, Magistrado Ponente José María Armenta Fuentes, quien a través de providencia de fecha 04 de marzo de 2022 resolvió devolver el expediente de la tutela de la referencia con sus anexos a este Juzgado, por las razones expuestas en dicho proveído.

2. Por la Secretaría de este Juzgado **VINCÚLESE** a la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** al presente trámite; acorde con lo expuesto en la parte motiva de este auto.

3. Por el medio más expedito, comuníquese la iniciación de la actuación al Representante Legal del **CONSEJO NACIONAL ELECTORAL**, de la **PREVISORA S.A. COMPAÑÍA DE SEGUROS**, y de la **REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL** y/o quienes hagan sus veces, a quienes se les enviará copia de la tutela y sus anexos, para que dentro del término de un (1) día, contado a partir de la fecha de su recibo, se refieran sobre todos y cada uno de los hechos relacionados en el escrito de ésta.

4. Hágase la salvedad referente a que, de no ser los funcionarios competentes para el conocimiento de la acción de la referencia, se remita de manera inmediata a los que ostenten dicha facultad, informando tal situación al Despacho.

5. Notifíquese mediante comunicación este auto a la parte accionante.

6. Con el valor legal que le corresponda téngase como pruebas las documentales acompañadas con el escrito de tutela.

7. **NEGAR LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR** presentada por Luis Ernesto Olave Valencia y Osiris Mena Moreno, quienes actúan a través de apoderado; acorde con lo señalado en la parte considerativa de este proveído.



8. **REQUERIR** al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, para que en el término de un (01) día, siguiente a la notificación del presente proveído, alleguen cada uno un informe con destino al expediente de la referencia, en el que certifique si existe un listado taxativo de cuáles son las entidades o compañías autorizadas para expedir la póliza o garantía bancaria de que trata el numeral primero del artículo octavo de la Resolución No. 8439 del 25 de noviembre de 2021, expedida por el Consejo Nacional Electoral.

9. **REQUERIR** a la Previsora S.A. Compañía de Seguros, para que en el mismo término señalado en precedencia, informe a esta Agencia Judicial con claridad las razones por las cuales respondió de forma negativa la solicitud elevada por la parte actora vía correo electrónico del 23 de febrero de la presente anualidad, en la que solicitó la expedición de la póliza de la referencia. En el mismo informe deberá manifestar a qué partidos o movimientos políticos relacionados en la Resolución No. 1323 del 15 de febrero de 2022, les ha expedido la citada póliza.

Por Secretaría, remítasele a la Previsora S.A., Compañía de Seguros copia de la Resolución No. 1323 de 15 de febrero de 2002.

10. **RECONOCER** a **AUGUSTO ALFONSO CAMPO CAMACHO** con cédula de ciudadanía **79.391.024** y tarjeta profesional **111.348** del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado judicial de la parte actora, en los términos y para los efectos del mandato aportado al expediente.

Teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional y el Consejo Superior de la Judicatura tendientes a la mitigación del COVID 19, los documentos, respuestas, requerimientos o memoriales, deben ser allegados a través de correo electrónico a la dirección admin10bt@cendoj.ramajudicial.gov.co.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

AUGUSTO LLANOS RUIZ
JUEZ

JGR